

GRECIA

COMENTARIO GENERAL

Situación política, económica y social

A primeros de mes, el Gobierno de Alexis Tsipras consiguió la aprobación del Parlamento de las reformas acordadas con los acreedores a cambio del desembolso de 1.000 millones de euros del rescate. Tras un encendido debate de diez horas, en el que la oposición volvió a criticar al Ejecutivo por tramitar las leyes importantes mediante el procedimiento de urgencia, el paquete legislativo fue aprobado tan solo con los votos de la mayoría gobernante. El Ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, justificó las prisas por legislar estas medidas con el argumento de que de no aprobarse la ley antes de finales de año, el desembolso de este subtramo hubiera tenido que someterse nuevamente a la aprobación de distintos parlamentos nacionales de la Unión Europea (UE). Defendió el acuerdo logrado con los acreedores, ya que aseguró que todavía se puede negociar “sobre las deudas de las pymes, las deudas de consumo y las hipotecas” cuya discusión iniciará a primeros de febrero. La ley contiene 13 requisitos previos acordados con las instituciones entre los que figura la privatización parcial de la compañía de distribución de electricidad (ADMIE), la nueva tabla salarial de los funcionarios y la creación de un fondo de privatizaciones, que será supervisado por Grecia y sus acreedores.

La nueva legislación prevé que los fondos privados que deseen actuar en Grecia deben disponer de un capital mínimo de 100.000 euros, funcionar bajo la supervisión y con permiso del Banco de Grecia y tener una sede o bien en este país o en algún Estado del Espacio Económico Europeo. La cesión o venta de una deuda se permite solo para préstamos, cuyo pago lleva un retraso de al menos 90 días. Esta disposición legal tiene muchos críticos en Grecia, incluido el propio Gobierno, que hace unos meses había rechazado categóricamente la venta de préstamos a empresas en el extranjero. Los críticos advierten que estas carteras de créditos se malvenderán, provocarán el cierre de aún más empresas y engrosarán así el ejército de parados.

Entre los asuntos candentes que han quedado para el año próximo está la reforma laboral y las pensiones, dos temas con un gran potencial conflictivo en una sociedad que lleva más de seis años padeciendo recortes. Tsipras ha asegurado que evitará bajar las pensiones principales, pero no ha prometido nada para las auxiliares, que conforman la tercera parte de los ingresos de un jubilado, y son financiadas exclusivamente con las aportaciones de patronos y empleados. En total, Grecia debe ahorrar el próximo año 1.400 millones de euros a través de la reforma del sistema de pensiones.

Además, el Gobierno ha tenido que aplazar a enero por presiones de los acreedores la votación de un conjunto de medidas que contemplan paliar el impacto de las políticas de austeridad y que se bautizó como el “programa paralelo”.

Tras el revuelo que esta decisión ha generado, fuentes del Gobierno señalaron que el proyecto de ley “no se ha retirado”, sino que se tramitará por el procedimiento ordinario a comienzos de 2016, en lugar de hacerlo por el de urgencia. Justificaron la decisión de posponer la aprobación de la ley ante la “actitud irresponsable” de la oposición que abandonó el debate -ya que el proyecto ya se había empezado a tramitar en comisiones- y aseguró que el programa provocaría un “agujero financiero y haría descarrilar los presupuestos” generales.

La conservadora Nueva Democracia, el centrista Potami y el socialdemócrata Pasok dejaron la sesión después de denunciar la ausencia de informes de la oficina de contabilidad del Estado sobre el coste preciso de cada una de las medidas. Ante este hecho, el Ejecutivo optó por aplazar el proceso para que no se crearan “impresiones infundadas que podrían provocar problemas en la negociación y en el trabajo del Gobierno en su esfuerzo de hacer frente a la crisis humanitaria”.

Con este “programa paralelo” el Gabinete Tsipras ha querido lanzar un mensaje tranquilizador hacia sus propias filas, que a comienzos del año deberán afrontar votaciones mucho más controvertidas que las que condujeron al reciente desembolso de 2.000 millones de euros y a los 1.000 millones pendientes. El borrador de ley prevé prolongar en un año las ayudas alimentarias para pobres y el almuerzo gratuito en escuelas de barrios desfavorecidos, ofrece seguro médico a los desempleados de larga duración y permite a la administración local elaborar programas sociales.

En cuanto a los Presupuestos Generales para 2016, los primeros que se presentan bajo el Gobierno de Alexis Tsipras, contemplan nuevos sacrificios para el contribuyente, y un fuerte ahorro en materia de pensiones. En 2016, el Estado pretende ingresar unos 5.700 millones de euros adicionales a través de subidas de impuestos, gravámenes y cotizaciones y recortes en las prestaciones sociales. El presupuesto contempla ahorros de diverso tipo por un total de 2.532 millones de euros, por ejemplo, en el gasto militar o, lo que es más problemático, en el sistema de pensiones. Al mismo tiempo, pretende elevar los ingresos en 3.201 millones de euros, a través de diversas subidas de impuestos.

El 3 de diciembre Grecia vivió la segunda huelga general del año que, pese a la contundencia de su reivindicación, protestar contra la bajada de las pensiones, tuvo un menor seguimiento que el primer paro contra los recortes del Gobierno dirigido por Alexis Tsipras hace tres semanas.

Los principales sindicatos, el del sector público, ADEDY, el del privado, GSEE, y el comunista PAME llamaron a secundar el paro contra las políticas de austeridad y en especial contra la reforma del sistema de las pensiones, que prevé recortes de las prestaciones y subidas de las cotizaciones.

Como suele ser habitual en Grecia, el paro tuvo mayor respaldo en el sector público que en el privado. El presidente en funciones de ADEDY, Stavros Kutsiumbelis, señaló a Efe que la participación fue menor que en la huelga del pasado 12 de noviembre, lo que atribuyó al hecho de que la nueva ley sobre pensiones aún no ha llegado al Parlamento.